

El rompecabezas de la guerra contra Venezuela

Yetiani Romero Rebollo

DOI: 10.54871/gS23b10g

En la vuelta de siglo, Venezuela experimentó el inicio de un profundo proceso de cambio con la llegada de Hugo Chávez al poder. En 1999, se aprobó una nueva Constitución apoyada por la gran mayoría de la población. La Revolución Bolivariana representó un desafío a los intereses del hegemón, que inició rápidamente una ofensiva contra el proceso venezolano. Sin embargo, ni el golpe de Estado de 2002, ni los sucesivos intentos por someter a Venezuela funcionaron en los catorce años de gobierno de Hugo Chávez. El apoyo popular al proceso bolivariano fue contundente durante ese periodo y, para Estados Unidos, se hizo necesario un cambio de estrategia.

Con la muerte de Hugo Chávez en 2013, se abrió una oportunidad. Para muchos, el proceso bolivariano era un proyecto populista y personalista que no sobreviviría a la ausencia del liderazgo carismático de Chávez. De tal suerte, se inició el despliegue de un *proceso rampante de guerra irregular*, con pretensiones imperialistas y continentales. El contexto regional estuvo marcado por un cambio de época que dio fin a la mayoría de los gobiernos *progresistas* que habían emergido en la primera década del siglo XXI. Esto permitió el aislamiento

regional de Venezuela como la primera condición para desplegar la guerra contra el país, que lo mantiene en un constante clima de crisis política y económica. No obstante, hasta ahora, Venezuela ha resistido a las pretensiones injerencistas del *sujeto hegemónico* (Ceceña, 2004).

En el presente texto, se describe y analiza dicho proceso de guerra, sus etapas y mecanismos. Se sostiene que las motivaciones para instalar una guerra consisten en disciplinar a Venezuela y recuperarla como parte del sistema de dominación hegemónico, cancelar así el desafío sistémico-ideológico que representa la Revolución Bolivariana y disponer de sus riquezas naturales y su posición en el escenario geopolítico mundial.

En la primera parte, se explora el devenir de la guerra en Venezuela en cuatro dimensiones centrales: construcción de narrativa, ruptura o corrosión del tejido social, asedio y deslegitimación institucional e intervención directa. Se analizan con detalle motivos, características, objetivos e intereses, para finalizar presentando algunas consideraciones sobre los alcances de la Revolución Bolivariana y de la guerra en su contra.

Las dimensiones de la guerra

Durante los últimos años, se han venido creando condiciones que posibilitan una guerra contra Venezuela. Temporalmente, podríamos rastrear intentos por desestabilizar al Estado venezolano desde los inicios de la Revolución Bolivariana en 1999, pasando por el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, las protestas de 2004, el referéndum constitucional de 2006, e incluso, en el ámbito regional, el golpe de Estado de Honduras de 2009, entre otros muchos intentos por golpear el proceso de cambio venezolano. No obstante, la actual estrategia para preparar ese escenario comienza de manera más precisa entre el 2012 y 2013, tras la reelección del presidente Hugo Chávez, su posterior muerte y el ascenso de Nicolás Maduro al poder ejecutivo.

La guerra en Venezuela ha tenido varios momentos o etapas para ir construyendo las condiciones de intervención. Aunque mantienen una temporalidad propia, no son estrictamente cronológicas y algunas pueden darse de manera simultánea, pero sin la etapa anterior no es posible desarrollar la siguiente. Es decir, cada etapa es una suerte de capa en un círculo concéntrico cuyo objetivo es hacerse del territorio conforme se acerca al centro. Esto puede explicarse gráficamente de la siguiente forma:



Cada capa, etapa o nivel de la guerra tiene sus propias modalidades, temporalidad y agentes. La primera etapa, la de construcción de narrativa, es también la más importante, pues permea a las demás y se desenvuelve de manera permanente. Con lo que podemos identificar como una *guerra mediática*, empieza la construcción de la guerra propiamente dicha. Sin una narrativa o discurso que justifique la intervención no hay posibilidades de instalar una guerra, por lo que la narrativa está en constante proceso de construcción. Sus modalidades son el uso de noticias falsas, la manipulación de la información y el uso de un lenguaje específico para referirse al Estado venezolano y su gobierno. Se puede rastrear hasta 2002, durante el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, cuando los medios tuvieron un papel fundamental en el modo como relataron los sucesos del 11 de abril en el puente Llaguno de Caracas, justificando el golpe. Como es

un proceso continuo, también se puede identificar la campaña contra el referéndum constitucional de 2006 y la disputa ese mismo año entre el gobierno y el canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV), entre otros. Pero para el periodo específico de guerra actual, la construcción de la narrativa comienza en 2013 y se renueva constantemente conforme transcurren los eventos políticos nacionales, pasando paulatinamente a la producción de un imaginario sobre la existencia de una dictadura.¹ Los agentes de esta etapa de la guerra son los medios de comunicación, mientras que hay un impulso desde Estados Unidos para la construcción de la narrativa.

En la dimensión de ruptura y corrosión del tejido social, se trabaja en crear descontento de la población con el gobierno en los ámbitos económico y político. Sus modalidades son la *guerra económica*, con el desabasto y la inflación como sus derivaciones, así como el desarrollo de protestas violentas, conocidas en Venezuela como guarimbas. El tejido comunitario que se formó durante los gobiernos de Chávez, bajo las concepciones de la democracia participativa y protagónica y el poder popular representado por prácticas organizativas en los sectores populares, intenta romperse con la decepción e impacto que generan las condiciones económicas creadas bajo esta etapa de la guerra. Las protestas violentas, por su lado, ayudan a generalizar esa sensación de inestabilidad política y descontento en la población. Las guarimbas contemporáneas se remiten a las protestas de 2004. En el escenario actual, las guarimbas contra el gobierno de Nicolás Maduro han tenido lugar en 2014 y 2017 principalmente, mientras que el escenario de desabasto e inflación ha sido constante desde 2012. Los sujetos involucrados, a grandes rasgos, son la oposición y los grupos empresariales nacionales, con el apoyo de entidades de Estados Unidos tal como la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

¹ Particularmente las series que circulan por plataformas como Netflix, Prime y similares, insisten en la idea de una narcodictadura con altísimos niveles de corrupción.

En la etapa de asedio y deslegitimación institucional, se avanza en el debilitamiento del Estado. Una de sus modalidades es diplomática, con el reconocimiento internacional a la oposición y el desconocimiento de las instituciones electorales, judiciales y de gobierno. De la mano de la diplomacia, se desenvuelven sanciones contra funcionarios e instituciones gubernamentales, las cuales, más que el ataque a individuos específicos, van dirigidas a debilitar los soportes económicos del Estado, como por ejemplo las sanciones contra la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la negación del acceso a los circuitos de comercio internacional. Temporalmente, los sucesos relevantes tuvieron lugar en 2015, con la declaración de Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos; en 2017, con la conformación del Grupo de Lima; y en 2019, con el reconocimiento de varios gobiernos al diputado Juan Guaidó como *presidente interino*. Los agentes en el ámbito internacional son Estados Unidos y el Grupo de Lima, mientras que en el ámbito local vuelve a aparecer la oposición.

La última etapa, actualmente en un despliegue inicial, es la de la intervención. Sus modalidades son el golpe de Estado, las incursiones paramilitares, el acoso externo y el uso de mercenarios. En estos intentos de golpe de Estado e intervención, se ha pretendido ganar apoyo dentro de la Fuerza Armada, el cual ha sido encontrado marginalmente en algunos oficiales desertores, muy pocos con grados superiores. Esta etapa se ha desarrollado en 2017, con los ataques de un exfuncionario policial a las sedes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público; en 2018, con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro; en 2019, con el intento de ingresar cajas de abasto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); y más recientemente, en 2020, con la incursión de un grupo de mercenarios de la empresa Silvercorp USA; entre otros eventos. Además, se han venido desarrollando ejercicios militares en la región encabezados por Estados Unidos.

Dicho esto, falta responder a cuestiones importantes: ¿cuáles son los motivos para crear una guerra contra Venezuela?, ¿qué

características tiene esta guerra?, ¿cuál es el objetivo final?, ¿quién(es) son los interesados en hacer una guerra en Venezuela?

Entre 1958 y 1999, el país fue gobernado bajo un sistema bipartidista, producto del golpe de Estado de 1958 contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la firma del llamado Pacto de Punto Fijo entre los principales partidos políticos. Durante este periodo, los partidos Acción Democrática (AD) y el Comité Político Electoral Independiente (COPEI) se alternaron en el poder bajo un modelo de democracia representativa que llegó a ser vista como ejemplar en un contexto de dictaduras militares en casi toda la región de América Latina. Como fruto del pacto de 1958, ambos partidos habían desdibujado las ideologías que los habían mantenido enfrentados antes de la dictadura de Pérez Jiménez, y en general sus gobiernos se mantuvieron alineados a las políticas estadounidenses, especialmente en el ámbito de la defensa durante la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional de los años setenta (lo que explica en parte la continuidad del sistema democrático liberal, pero que no impidió que Venezuela buscara sus propios intereses geopolíticos, como su presencia como miembro fundador de la OPEP). De igual forma, tras la llamada década perdida y la crisis de la deuda de los años ochenta, los gobiernos de AD y COPEI se alinearon a las políticas de ajuste estructural en clave neoliberal emanadas del Consenso de Washington, lo que fue respondido por la población con una revuelta popular en 1989, conocida como el Caracazo, y un intento de golpe de Estado en 1992 encabezado por el entonces desconocido Teniente-Coronel Hugo Chávez Frías.² Tanto el

² En los primeros días de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), se anunciaron una serie de medidas de ajuste económico que contemplaban un acercamiento al FMI, privatizaciones y aumentos en los costos de productos básicos. Tras decretarse el aumento del precio de la gasolina y el transporte, el 27 de febrero de 1989, los sectores empobrecidos de Caracas salieron a las calles en una revuelta popular que se respondió con la salida del ejército para reprimir las protestas, dejando innumerables muertos, cuyas cifras aún siguen siendo desconocidas, pero que algunos calculan entre cientos y miles. Tres años después, el 4 de febrero de 1992, un grupo de militares organizados en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) intentaron dar un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, arguyendo los eventos de 1989 como una de sus principales causas.

Caracazo como el intento de golpe de Estado respondían al desgaste del sistema político *puntofijista*, que se expresó en una gran desigualdad y una crisis económica, política y social.

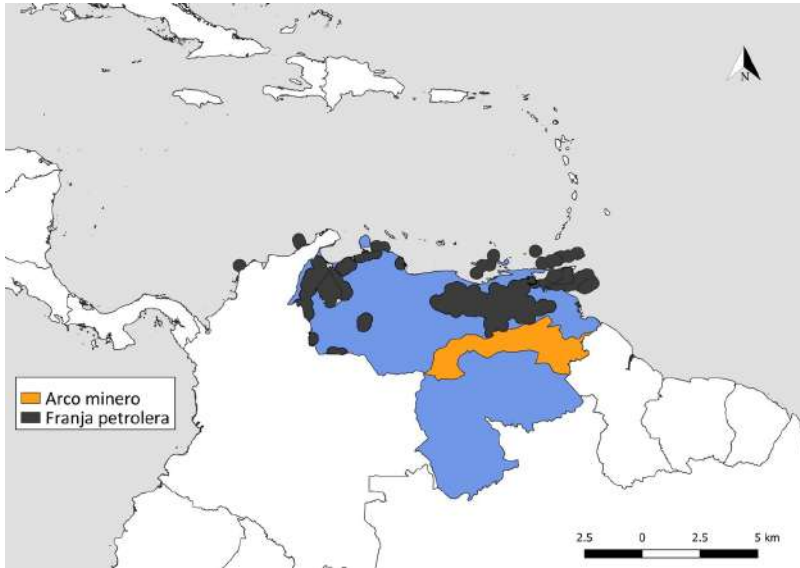
El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998 y el proceso de cambio que despegó con la aprobación de la Constitución de 1999 fueron la respuesta de la sociedad a ese sistema desgastado y significaron el indisciplinamiento del pueblo venezolano. El gobierno de Chávez se mostró opuesto a los intereses estadounidenses en la región, propuso construir un mundo multipolar y buscar alternativas al neoliberalismo y al modo de producción capitalista. El Departamento de Estado de Estados Unidos encuentra ese alejamiento del modelo liberal como autoritario y corrupto (lo que en realidad es parte de la construcción de la etapa mediática de la guerra):

Los recientes presidentes de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2019), se definieron ellos mismos en parte a través de su oposición a los Estados Unidos, regularmente criticando el gobierno estadounidense, sus políticas y sus relaciones con América Latina. Las políticas del expresidente Maduro [sic] están marcadas por autoritarismo, intolerancia a la disidencia y represión violenta y sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales -incluyendo el uso de tortura, detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales y la existencia de más de 700 prisioneros de conciencia (Department of State, 2019).

De ahí que la primera razón de librar una guerra es la de (re)disciplinar a Venezuela y recuperarla como parte del sistema de dominación hegemónico. La importancia de recuperar Venezuela no solo significa doblegar a un sujeto indisciplinado. Los intereses en las riquezas estratégicas de Venezuela tienen un papel clave. Venezuela tiene 302.809 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, lo que la convierte en el país con las mayores reservas del mundo, la mayoría de ellas al interior del país, en la Franja Petrolera del Orinoco (OPEP, 2020 y PDVSA, s.f., p. 19). Además, tiene importantes reservas de gas, de minerales como oro, diamantes, coltán, bauxita,

granito, cuarzo y hierro, todas ellas presentes en el Arco Minero del Orinoco, donde también se encuentran muchas de las llamadas tierras raras (Navarro, 2018).

Mapa 1. Riquezas estratégicas de Venezuela



Fuente: elaboración de Adriana Franco.

De tal manera, el escenario que se instala en Venezuela es el de una guerra no convencional e irregular que se inscribe en la *dominación de espectro completo*, ya que no se hace uso de un ejército regular que busque desplegarse al interior del país, ganar posiciones y penetrar el territorio. En cambio, se hace uso de fuerzas irregulares, como paramilitares, mercenarios y fuerzas especiales. En cuanto al espectro completo, idea emanada del Pentágono a finales del siglo XX, consiste en el control de todos los aspectos del espectro geográfico, espacial, social y cultural (Ceceña, 2018). La búsqueda de ese control tiene “dos objetivos generales: garantizar el mantenimiento del capitalismo y dentro de él la primacía de Estados Unidos; y garantizar la

disponibilidad de todas las riquezas del mundo como base material de funcionamiento del sistema” (Ceceña, 2013,p. 47).

Por lo tanto, Estados Unidos busca retomar el control de Venezuela para satisfacer sus propios intereses como sujeto hegemónico, lo que no significa que no se involucren otros actores. En el ámbito continental, varios países se alinean a los objetivos de derrocar a la Revolución Bolivariana, varios de ellos a su vez (re)disciplinados: como Ecuador, Bolivia y Brasil.³

Localmente, los partidos opositores se agrupan en una alianza heterogénea llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) desde el 2008, algunos buscando el retorno a los viejos tiempos del *puntofijismo*, como demostró el efímero gobierno de facto de 2002 al reestablecer la Constitución de 1962. Pero dada la lejanía, también buscan un nuevo ordenamiento que desplace completamente al chavismo y revierta los cambios producidos a lo largo de veinte años. En esta alianza, lo mismo entran los viejos políticos de la *Cuarta República*, como los sectores oligarcas que intentan sabotear los esfuerzos por llevar a flote la economía. Si justamente el interés de controlarlo todo es mantener el sistema capitalista, no es de extrañar el involucramiento de grandes empresas transnacionales.

La guerra contra Venezuela no es “para derrocar a un dictador”, cuestión que evoca las de Irak, Libia y circunstancialmente las de cualquier país petrolero que pretenda poner condiciones a la entrega de sus recursos. Es la guerra de la Exxon, que no deja de abrir brecha desde la región en disputa del Esequibo; es la guerra de Chevron, del coltan, el uranio, el thorium, el gas y el oro; es la guerra del estado norteamericano por reforzar sus condiciones materiales y su posición hegemónica (Ceceña y Barrios, 2017).

No solo es la búsqueda de recursos lo que motiva a Estados Unidos a llevar a cabo esta guerra. Venezuela se instala en el centro de la disputa hegemónica. Sus alianzas con los adversarios de Estados

³ Bolivia, en el periodo del golpe de Estado de 2019 a 2020.

Unidos suman una causa más para intentar retomar el control del país. El Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) lo expresa así:

Cada desafío y amenaza a la seguridad en nuestro hemisferio está atravesado por la crisis en Venezuela. Rusia proporciona aliento vital a través de préstamos, apoyo técnico y militar y retórica. China es el mayor acreedor estatal en solitario, endeudando tristemente al pueblo venezolano con más de 50 mil millones de dólares y exportando tecnología de vigilancia usada para monitorear y reprimir al pueblo venezolano. Irán ha reiniciado vuelos directos de Teherán y revitalizado sus lazos diplomáticos. Siempre presente, Cuba provee de personal crítico y recursos para apuntalar a un dictador corrupto (Faller, 2019).

De tal manera, Venezuela hoy es el epicentro de la guerra en el continente. Los esfuerzos por derrocar a la Revolución Bolivariana han sido constantes y con su carácter de guerra irregular, no existe la posibilidad de vislumbrar un fin a dicha situación. Aunque poco probable, la situación podría mutar a una guerra regular con una intervención abierta si se prestaran las condiciones y si el actual ocupante de la Casa Blanca decidiera cumplir sus amenazas. Sin embargo, los esfuerzos de Venezuela por esquivar los intentos por derrocar al gobierno en gran medida han funcionado, aunque no se ha logrado evitar la cotidianidad de la guerra.

Regresando al esquema del círculo de la guerra, tenemos que el paso final es el de la intervención, lo que se puede leer como uno de los objetivos centrales, aunque no es el fin último. Veamos entonces cada nivel de esta guerra de forma detallada.

Nivel mediático

Como se mencionó, la capa mediática es donde inicia la construcción de la guerra y se desenvuelve de manera permanente, al mismo

tiempo que se avanza en las otras capas. La estrategia de guerra se arma en torno al trabajo *mediático* por medio de la construcción de una narrativa catastrófica sobre Venezuela, y en los medios de comunicación se pretende legitimar todos los intentos por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y una posterior intervención. Es decir, se hace uso de la información con fines propagandísticos.

La manipulación de la información no es algo nuevo. El uso de *propaganda* es una de las herramientas para la creación de sentidos y su fin es “modificar la conducta de las personas a través de la persuasión [...] uno de los principales medios para ejercer influencia en la gente y obtener ese fin es la mentira. La mentira como arma” (Fazio, 2013, p. 6). Se hace uso de noticias falsas y manipulación de la verdad para influir y modificar la opinión pública, todo como parte de *operaciones de guerra psicológica*.⁴

Esta guerra mediática no es llevada a cabo por intereses abstractos e invisibles. La estrategia de hacer uso de la información para manipular la matriz de la opinión pública es operada por sujetos específicos. La estrategia se delinea desde Washington y Miami, en las oficinas del Departamento de Estado y el cuartel del Comando Sur respectivamente. Desde ahí se produce la estrategia diplomática y militar dirigida a Venezuela, expresada en documentos de las respectivas dependencias.

La construcción de una narrativa sobre la situación venezolana está dirigida a dos auditorios. Por una parte, a la opinión pública estadounidense e internacional, desde donde se presenta un escenario catastrófico del país y la presencia de un *régimen* autoritario, algunas veces tildado de dictadura. Por otra parte, está el público venezolano,

⁴ Hasta el 2010, el Departamento de Defensa de Estados Unidos mantenía un manual doctrinario de *Operaciones de Guerra Psicológica* (PSYOP), en el que se indicaba que su propósito era influir en la percepción de audiencias extranjeras y su subsecuente comportamiento (Joint, 2010). Actualmente, el manual es llamado *Operaciones de Información*, donde se advierte un ambiente de la información formado por las dimensiones física, informacional y cognitiva. Esta última resulta la más importante debido a la posibilidad de influir en los individuos por medio de factores como las creencias culturales, normas, moral, identidad, ideología, etc. (Joint, 2014).

que intenta ser permeado culturalmente con el *American Way of Life* por medio de la polarización de la sociedad y el cuestionamiento al antiimperialismo de la Revolución Bolivariana. Es, ante todo, una narrativa que intenta imponer el modelo económico y político liberal en un país que ha decidido desafiarlo. La estrategia diplomática del Departamento de Estado para Venezuela indica que:

Nuestro reto es ofrecer a todos los venezolanos -incluyendo a la juventud, sociedad civil y no élites- información precisa sobre los Estados Unidos. Ofreciendo acceso imparcial a información sobre las políticas, valores, historia, arte, música, deportes y cultura estadounidenses, [...] los venezolanos podrán evaluar por ellos mismos las acciones y creencias de Estados Unidos (DoS, 2018, p. 5).

La justificación de Estados Unidos para intervenir en el nivel mediático es que el gobierno les ha mentido a los venezolanos sobre las acciones de Estados Unidos en la región. Invisibilizando el largo historial estadounidense de intervenciones en América Latina, se busca borrar la memoria de los venezolanos, mencionando las bondades de la economía de mercado. “La embajada en Caracas continuará contrarrestando la propaganda anti-mercado difundida por el gobierno venezolano, trabajando con organizaciones no gubernamentales pro mercado, empresas, centros educativos y medios, para proveer información pro mercado políticamente neutral al pueblo venezolano” (DoS, 2018, p. 10). No es de extrañar que en esta estrategia se busque influir en la juventud, aquella que no vivió la desastrosa implementación del neoliberalismo en Venezuela y eventos como el Caracazo. Tan solo para ilustrar el potencial de dirigirse al público joven, vale la pena recordar que el *movimiento estudiantil* de 2007 tuvo un discurso neoliberal y fue la plataforma para la emergencia de jóvenes políticos de la oposición.

En el mismo tono, la estrategia del Comando Sur para la región incluye esparcir información sobre la *influencia maligna* de los rivales de Estados Unidos, los que, según su perspectiva, llevan a cabo la estrategia de desinformación:

Trabajaremos con nuestros socios para despuntar la actividad maligna en nuestro vecindario. Compartiremos información sobre las predatorias y opacas prácticas económicas de China alrededor del mundo con aliados y socios para incrementar el entendimiento de la influencia maligna de China. Negaremos a Rusia la oportunidad estratégica de controlar el espacio informacional en este hemisferio usando nuestro compromiso consistente y presencia para contar nuestra historia y disminuir los efectos de su campaña de desinformación (Southcom, 2019).

Sin embargo, aunque el Departamento de Estado, funcionarios del gobierno estadounidense y agencias gubernamentales puedan publicar comunicados de prensa en los que se expresa esa estrategia, es en los medios donde se comunica propiamente. Casado (2016) indica que los medios hegemónicos, concentrados en 25 empresas transnacionales, han tratado de ocultar su parcialidad bajo el *mito de la objetividad*. Si en el siglo XIX el periodismo tenía una vocación ideológica, en la actualidad, su ideología liberal se esconde bajo su vocación comercial, siendo su ostentación como relatores de la verdad su mecanismo de encubrimiento (p. 16).

De ahí que se homogeneicen las líneas discursivas en torno al gobierno revolucionario de Venezuela en diarios que podrían ser considerados tan dispares como el socialdemócrata *El País* y el monárquico conservador *ABC*, pero ambos comparten y defienden la ideología liberal que Venezuela discute. Como resultado, es probable que el lector considere como verdadera la parcialidad que estos diarios comparten (Casado, 2016, p. 16).

En el plano de los medios de comunicación de masas internacionales, una de las características de la retórica usada por las grandes agencias de noticias y medios occidentales es la distinción del gobierno de Nicolás Maduro como *régimen*, usando ese término con una acepción negativa y no como un concepto político que indica un orden legal o una forma de gobierno. Algunos otros medios, por su parte, se saltan esa relativa moderación y pasan a calificarlo directamente como dictadura.

Como se había mencionado antes, el escenario mediático actual comienza a construirse desde antes de 2013, periodo caracterizado por el enfrentamiento entre el presidente Chávez con los medios de comunicación nacionales y por el montaje de una imagen de caudillo autoritario en los medios internacionales. Pero el escenario actual comienza propiamente tras la muerte de Chávez y la elección de Nicolás Maduro.

Entre 2013 y 2014, los medios reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente, aunque aparecen cuestionamientos a la limpieza de las elecciones y se reportan las guarimbas de 2014 como el inicio de una crisis política. En 2015, el triunfo electoral legislativo de la oposición se explica en los medios como consecuencia del descontento de la población con el gobierno y del desgastado modelo económico responsable de desabasto e inflación (de esto se hablará propiamente más adelante), y hasta 2017, las notas periodísticas giran en torno al enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, además de las ocasionales guarimbas de esos años. Simultáneamente, a finales de 2017, los medios empiezan a hablar de hiperinflación y degradación de la situación económica. El año 2018 está marcado por las elecciones presidenciales, en las que se acusa al gobierno de indisposición para entablar un diálogo con la oposición para después reportar la elección como fraudulenta e ilegítima. Finalmente, en 2019 se empieza a desconocer a Maduro como presidente, se reporta una supuesta crisis humanitaria sin precedentes y se reconoce al diputado Juan Guaidó como *presidente encargado* de Venezuela.

Vale la pena hacer un pequeño recorrido por algunos medios de comunicación para ilustrar la forma en que se comunica la situación venezolana y cómo se va modificando la estrategia. En 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Human Rights Watch (HRW), emitía una nota titulada “Venezuela: El legado autoritario de Chávez” donde acusaba una concentración de poder e indiferencia por los derechos humanos en los catorce años de gobierno de Chávez (HRW, 2013). Aunque HRW no es propiamente un medio de comunicación, esta nota resume la narrativa construida durante la presidencia de Hugo Chávez y su sucesor.

Cuando se empezaba a hablar de hiperinflación, en el diario español *El mundo* se reportaba que, “Según el FMI, la inflación en Venezuela en 2018 podría superar el 2.300 %. Sin embargo, el presidente socialista argumenta que los precios suben por una ‘guerra económica’ de comerciantes para ‘derrocarlo’” (Santander, 2018).

El entremetido sugiere que la guerra económica es tan solo una estrategia discursiva del gobierno y que los intentos para derrocarlo son suposiciones sin pruebas. También cabe resaltar la referencia al FMI, cuya fuente es usada constantemente para construir la retórica catastrófica en el ámbito económico, tal como lo hacía el diario *El País* en octubre de 2019:

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó en julio a recalcular las estimaciones de la brutal hiperinflación que vive Venezuela desde hace dos años, y en su nuevo informe de este martes las ha rebajado nuevamente. El país sudamericano, inmerso en una profunda crisis humanitaria y política, cerrará el año con 200.000 % de inflación y una estimación de 500.000 % para 2020 (Singer, 2019).

De la misma forma, se procura justificar las sanciones financieras y bloqueos impuestos por Estados Unidos por medio de acusaciones de corrupción. Por ejemplo, el embargo de cuentas venezolanas y reservas de oro en países extranjeros está plenamente justificado porque, como lo menciona CNN:

Maduro, los miembros de su familia y de su régimen han estado utilizando este marco legal [regulación en el Arco Minero del Orinoco] para dirigir las operaciones mineras ilegales en la región, otorgando a militares venezolanos un ‘acceso liberal’ a las minas para comprar su ‘lealtad acérrima’, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo, cuando impuso sanciones a la industria minera de Venezuela. (Cotovio, Soares y Bonnett, 2019).

La BBC, por su parte, maneja una retórica similar basada en los señalamientos de corrupción y autoritarismo: “Estados Unidos anunció

un embargo económico sobre Venezuela, con la intención de poner fin al gobierno autoritario de Nicolás Maduro” (Aponte, 2019).

Esta narrativa construyó en 2019 uno de sus pilares principales en la crisis humanitaria por la que se supone que atraviesa Venezuela. Nuevamente, se acusa al gobierno de haber generado esa crisis. Días antes del intento de la oposición y los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de ingresar cajas de la USAID por la frontera con Colombia para generar desestabilización, en febrero de 2019, el relato giró en torno a la necesidad del envío de ayuda humanitaria.

El reconocimiento de una crisis humanitaria sería la confesión pública del fracaso del Gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, ningún país u organismo internacional puede imponer una ayuda que un gobierno no acepta o pide. Ahora, el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, ha pedido ayuda internacional. (Ospina-Valencia, 2019).

Sin embargo, los propios medios reconocían que la supuesta ayuda humanitaria tenía intenciones que iban más allá de enviar alimentos y medicinas para ayudar a los venezolanos que han sufrido el yugo del socialismo. Desde Cúcuta, Colombia, reporteros del New York Times mencionaban que:

Según esta línea de razonamiento, si se interrumpiera el dominio total de Maduro sobre el suministro de alimentos y medicinas y se mostrara que ha perdido el control de la frontera, su legitimidad como presidente del país se debilitará. Si los militares pueden ser convencidos de no interponerse entre la población venezolana y la ayuda humanitaria, Maduro podría caer (Casey y Kurmanaev, 2019).

Por otra parte, a la hora de reportar acciones contra el gobierno, se suele presentarlas como suposiciones o incluso montajes del propio gobierno. En agosto de 2018, la mayoría de los medios de comunicación reportaron el ataque con drones contra Nicolás Maduro como un supuesto atentado, a pesar de la claridad de las imágenes que se difundieron. “Nicolás Maduro sale ileso de ‘atentado’ en Caracas, dicen autoridades” reportaba CNN (CNN, 2018); “Tras

supuesto atentado a Maduro, Venezuela responsabiliza a Colombia de ‘cualquier nueva agresión’” se decía en France 24 (Méndez, 2018).

Como se puede ver en los ejemplos anteriores, existen varias tácticas de manipulación. Aunque en este espacio no es posible exponer a cada medio informativo, una revisión sencilla de las notas sobre Venezuela puede comprobar que el patrón narrativo se repite para prácticamente cualquier medio internacional. Casado (2016) menciona que para Venezuela las ‘técnicas’ de manipulación son: la manipulación en los titulares, los cuales se ‘editorializan’ independientemente del contenido; la falta de espacio y tiempo para dar rienda suelta a los estereotipos; el desequilibrio en las fuentes y sesgo lexicológico, lo que incluye el uso parcial de hechos reales, es decir, de especulación, no de información; la opinión por encima de la información y el uso de las agencias para editorializar la información; y la publicación de editoriales que avalan un golpe de Estado.

En cuanto a los medios nacionales venezolanos, se ha señalado desde distintos lugares que el gobierno venezolano ha restringido la libertad de expresión desde el gobierno de Hugo Chávez. Esos señalamientos vienen de los propios medios, de organizaciones no gubernamentales, de organismos multilaterales como la CIDH e incluso desde algunos sectores académicos (véase, por ejemplo, Banfi, 2019; CIDH, 2017; Espacio Público, 2018; Vélez et al., 2019).

Para entender estas posiciones hace falta remitirse al golpe de Estado de 2002, cuando las cadenas de televisión tuvieron un papel fundamental al manipular las imágenes del puente Llaguno que sirvieron como justificación al golpe de estado; censuraron información sobre el golpe de Estado; y mintieron abiertamente sobre la supuesta renuncia de Hugo Chávez.⁵

⁵ Sobre el golpe de estado de 2002 y el papel de los medios de comunicación, véase el documental *La revolución no será transmitida* (Bartley y Ó Briain, 2003).

Los medios de comunicación privados fueron críticos de Chávez antes y después del golpe. El papel central de los medios valió para que el gobierno de Chávez tomara medidas para impulsar una propuesta informativa contrahegemónica. Antes del golpe, el Estado venezolano contaba solo con Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional de Venezuela (RNV) para difundir sus propias versiones del acontecer político. Después del golpe, se impulsaron proyectos como Telesur y otros medios informativos alternativos, incluyendo medios televisivos, radiales y escritos, algunos de carácter estatal y otros comunitarios.

El aumento de la participación del Estado y de proyectos afines a la Revolución Bolivariana ha servido de excusa para acusar al gobierno de restringir la libertad de expresión. Sin embargo, los medios de comunicación venezolanos siguen siendo mayoritariamente de carácter privado y estos siguen criticando duramente al gobierno, incorporando la narrativa construida en torno a la Revolución Bolivariana. Tan solo en la televisión, las cadenas Venevisión y Televen concentran el 46% de la audiencia, sumado a que la mayoría de los venezolanos cuentan con televisión por suscripción (Casado, 2016, p. 413), a través de distintas empresas, como Inter del grupo transnacional estadounidense HMTE, NetUno, Supercable y Directv (transnacional estadounidense que recientemente salió del país). Estas empresas transmiten canales extranjeros con líneas editoriales hostiles al gobierno y que pertenecen a los grandes emporios mediáticos, como TVE, Caracol, Univisión, CNN, Bloomberg, Fox, BCC, entre otros (p. 420). En Venezuela, existe la libertad de expresión y los medios privados abusan de ese derecho al mentir y manipular al momento de informar, siendo el golpe de Estado el evento más vergonzoso y descarado en ese sentido. Lo que pasa en Venezuela es una polarización de la sociedad impulsada desde el ámbito mediático, que se extiende a todas las esferas de la vida cotidiana y que se ha venido construyendo desde antes del golpe de Estado de 2002, de la mano de la narrativa que se expone al exterior del país.

Ruptura del tejido social

Como se había mencionado, en esta etapa se busca crear descontento en la población venezolana para legitimar un paulatino cambio de gobierno. Para lograr dicho fin, se recurre a operaciones o *mecanismos de guerra no militares*, lo que implica el uso de lo que Estados Unidos define como *instrumentos de poder nacional* e incluye tanto una *guerra económica* que genera desabasto e inflación, como protestas violentas conocidas como *guarimbas* que generan un clima de inestabilidad política.

Recordemos que la guerra en Venezuela es una guerra irregular y no convencional. En la doctrina del Departamento de Defensa, la guerra irregular se lucha por legitimidad e influencia sobre la población. “Los adversarios que libran una guerra irregular tienen vulnerabilidades críticas para ser explotadas dentro de sus interconectados sistemas político, militar, económico, social, de información e infraestructura” (Joint, 2013, p. 1-6). En el mismo sentido, el Departamento de Defensa define la guerra no convencional como aquellas “operaciones y actividades dirigidas a habilitar un movimiento de resistencia o insurgencia para coartar, interrumpir o derrocar un gobierno” (Joint, 2014, p. 2-8).

De ahí que, en este nivel, colocamos las acciones de desestabilización político-económica ejercidas contra Venezuela. La guerra económica es necesaria para crear el descontento de la población para habilitar ese *movimiento de resistencia*, que en el caso venezolano se trata del fortalecimiento de la alianza opositora de la MUD. Las *guarimbas*, por su lado, son la expresión de la habilitación de ese movimiento que termine por romper el tejido social venezolano. En otras palabras, son acciones de subversión, definidas como “acciones diseñadas para socavar la fuerza o moral militar, económica, psicológica o política de una autoridad gobernante” (DoD, 2020, p. 205).

En el caso de la guerra económica, desde 2012 se comenzó a experimentar el desabastecimiento de productos de primera necesidad como alimentos, medicamentos y productos de higiene personal,

además de materias primas e insumos agrícolas e industriales. Curcio explica que la escasez de algunos productos no se debe a la falta de entrega de divisas del Gobierno al sector empresarial como lo ha argumentado la oposición, sino a un uso tramposo de esas divisas. En cambio, las razones del desabastecimiento son:

- 1) la disminución relativa de las importaciones con respecto a las divisas otorgadas al sector privado; 2) el acaparamiento por parte de empresas oligopólicas que dominan los mercados de algunos bienes; y 3) el contrabando de extracción [contrabando de productos venezolanos hacia Colombia, que a su vez obliga al cierre de fronteras] (Curcio, 2017, p. 44).

Por su parte, la inflación ha sido provocada por la manipulación del tipo de cambio paralelo (mercado de divisas ilegales), sostenida gracias a la dependencia de Venezuela de los bienes importados y a la concentración de esas importaciones en pocas empresas (Curcio, 2017, p. 76). En otras palabras, al ser pocos los importadores de bienes, estos tienen la capacidad de fijar los precios de los productos, y lo hacen con base en el tipo de cambio paralelo.

Para Salas (2015), la inflación es la expresión de la lucha de facciones o sectores empresariales para incrementar sus ganancias y su expresión es la escasez, por lo que es más conveniente hablar de especulación, usura y acaparamiento. En estos términos, es fundamental señalar que en Venezuela el problema económico es una expresión de la lucha de clases. De tal manera, “el fin último de la guerra económica emprendida por la burguesía parásita es la consolidación de las condiciones sociales de reproducción y explotación de los grupos concentrados [...] sobre la sociedad” (Salas, 2015, p. 13).

Vázquez (2019) identifica tres grupos de intelectuales venezolanos que explican de diferente manera la situación de crisis económica por la que atraviesa el país. En primer lugar, un grupo de opositores conservadores, quienes sostienen que el modelo económico socialista es la causa de la situación económica. Ese modelo se caracterizaría por una política expropiatoria, controles de precio y

enriquecimiento de gobiernos aliados, entre otros; el segundo grupo es el oficialista, quienes defienden la hipótesis de la guerra económica; por último, un grupo de izquierda opositora, donde se puede ubicar al propio autor, que sostiene que la situación es creada por un ajuste económico impulsado desde el Estado basado en la apropiación de la renta petrolera.

Si bien desde aquí sostenemos que existe una guerra económica contra Venezuela enmarcada en la instalación de una guerra irregular, hay que considerar que aunque se ha desafiado el modelo económico liberal impulsando iniciativas de producción comunitaria, la economía venezolana sigue siendo mayoritariamente capitalista con un énfasis en la tutela del Estado sobre la economía y en la dependencia de la renta petrolera, problema endémico de la economía venezolana que la Revolución Bolivariana no ha podido resolver del todo. Sin embargo, ha habido un esfuerzo por construir una nueva territorialidad expresada en la figura de las comunas, cuya institucionalidad:

Propone formas descentralizadas del poder, donde las ciudadanas y ciudadanos de manera directa asumen responsabilidades sobre los asuntos locales [...] Uno de los ejes centrales de este modelo, en su dimensión económica, es la apuesta por la propiedad social, la planificación productiva y la inversión social de los excedentes. (Fréitez et al., 2018, p. 392).

En todo caso, reiteramos que la inestabilidad económica es causada fundamentalmente por la influencia de grupos empresariales, la oposición político-partidaria y los Estados Unidos. Uno de sus objetivos es justamente romper ese tejido comunitario que impulsa un nuevo modelo económico, creado a lo largo de veinte años. Como se mencionaba antes, en la guerra irregular y no convencional se busca debilitar al gobierno y fortalecer a los grupos opositores. El involucramiento de Estados Unidos, aunque encubierto, puede rastrearse por su apoyo económico a partidos de la MUD. Se trata de mecanismos de financiamiento a través de agencias del gobierno estadounidense

y organizaciones no gubernamentales asociadas a él, principalmente la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En cuanto a la NED, organización fundada en 1983, a iniciativa del Congreso estadounidense, para encubrir las actividades de la CIA, recibe dinero directamente del Congreso pero por su carácter privado tiene la capacidad de utilizarlo según su propio criterio. La NED no está obligada a indicar a quiénes está financiando en Venezuela, pero se ha señalado como beneficiarios a Leopoldo López y María Corina Machado, así como a los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular (Golinger, 2019). Tan solo entre 2016 y 2019, la NED ha financiado con más de nueve millones de dólares distintos proyectos, como partidos políticos, líderes políticos y medios de comunicación.

NED en Venezuela 2016-2019		
Año	Presupuesto (dólares)	Proyectos
2016	1.684.568	37
2017	2.603.177	42
2018	2.425.293	42
2019	2.667.163	41
Total	9.380.201	162

Fuente: elaboración de Yetiani Romero con datos de la NED (2020).

Si se revisan los proyectos que financia la NED, se puede constatar el interés en dismantelar el modelo económico para regresar a un esquema neoliberal. El proyecto *Establishing a Democratic Framework for State-Owned Asset Privatization and Recovery*, en el cual se han invertido 284.095 dólares, busca “fortalecer actores venezolanos democráticos para desarrollar un marco de referencia para la privatización de empresas estatales y la recuperación de activos robados en una ventana corta de oportunidad” (NED, 2020). En este caso, habría que preguntarse quién quiere recuperar esos activos *robados*, dado

que son propiedad del Estado y la NED está buscando que pasen a manos privadas.

En otro de sus proyectos, aunque no se mencionan nombres, “una red de líderes emergentes será consolidada y entrenada. Similarmente, líderes emergentes aprenderán nuevas herramientas y conocimiento para involucrarse en el proceso de toma de decisiones y fortalecer sus capacidades de manejar proyectos” (NED, 2020). Esto último concuerda con los señalamientos que se han realizado respecto a la capacitación que Estados Unidos ha brindado a varios personajes de la oposición. Durante 2007, en varias universidades surgió el *movimiento estudiantil* de carácter neoliberal que se mencionó en el apartado anterior, de donde emergieron los líderes actuales de los partidos Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Entre ellos, se encuentran Yon Goicoechea, Freddy Guevara, Carlos Graffe, David Smolansky y Juan Guaidó, quienes fueron enviados en 2005 al Centro de Acción y Estrategias no Violentas Aplicadas (CANVAS) en Serbia y a Estados Unidos para estudiar las técnicas de cambio de régimen de Gene Sharp con apoyo de la USAID (Fazio, 2019).

Este mecanismo de financiamiento a la oposición tiene su origen en la apertura de una oficina de transición (OTI) de la USAID en la embajada de Estados Unidos en Venezuela en 2006. Desde esa fecha, esta oficina ha financiado a distintos agentes de la oposición (Golinger, 2007). Pero en el contexto actual, la estrategia de USAID se basa en la supuesta crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela. En 2017, inició el envío de ayuda humanitaria de la USAID, que desde entonces ha destinado 656 mdd, de los cuales 467 mdd son destinados a venezolanos fuera del país y 189 mdd dentro (USAID, 2020).

De lo anterior, derivan las protestas violentas conocidas como guarimbas, que consisten en el cierre de avenidas para instalar barricadas desde donde se enfrenta a las fuerzas policiales. En el actual contexto, las guarimbas se han desarrollado en 2014 y 2017 y han sido encabezadas por personajes de la oposición, principalmente de los partidos antes mencionados. En el caso de las guarimbas de 2014, organizadas en torno a un plan llamado *La Salida*, fueron

la respuesta de la oposición a su derrota en las elecciones de 2013. En este momento, podemos observar la articulación de las distintas capas de la guerra y los mecanismos que venimos describiendo:

En dicho año [2013], se observa un fuerte boicot económico, manipulación de los medios de comunicación, movilizaciones que terminan en acciones violentas, todo ello para crear un clima de ingobernabilidad. El año 2014 se abre con las llamadas Guarimbas impulsadas por los sectores opositores al chavismo, con el objetivo de generar un clima de desestabilización en la República que consiga, en última instancia, la renuncia del presidente Nicolás Maduro (Galiñanez y Rossi, 2015, p. 29).

En estas guarimbas, estuvieron involucrados Antonio Ledezma de Alianza Bravo Pueblo, Leopoldo López de VP, María Corina Machado de Vente Venezuela y el propio excandidato presidencial, Henrique Capriles de PJ. Por esos hechos, Leopoldo López fue arrestado y sentenciado a 13 años de prisión, Henrique Capriles fue inhabilitado en 2017 por 15 años y María Corina Machado tiene una prohibición para salir de Venezuela. Exactamente un año después de las guarimbas, los primeros tres personajes publicaron un manifiesto y jóvenes generaron disturbios en el barrio en el que reside la familia de Maduro, sumando la grabación de un pronunciamiento donde se llamaba a la rebelión militar, todo enmarcado en el *Plan Jericó* que buscaba generar caos y justificar una intervención extranjera (Gilañanez y Rossi, 2015, p. 30), lo que habría implicado el avance de la guerra.

Por su parte, en las guarimbas de 2017, la oposición sigue un patrón similar. Entre 2015, cuando la MUD logró ganar la mayoría calificada de la Asamblea Nacional (AN) y 2017, cuando el presidente convocó a la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la oposición había enfocado sus esfuerzos en derrocar al gobierno mediante un golpe legislativo. Sin embargo, tras fracasar en sus intentos se regresó a la estrategia de violencia callejera que genera un clima de inestabilidad.

Este clima de inestabilidad no es suficiente para el derrocamiento del gobierno, pero sí es un paso necesario para instalar una guerra dadas las consecuencias que tiene en el rompimiento del tejido social y comunitario. Una vez debilitado ese tejido y desarrollado el malestar entre la población, se avanza en el debilitamiento institucional del Estado.

Asedio y deslegitimación institucional

En esta etapa, se busca debilitar las instituciones del Estado venezolano, especialmente aquellas fundadas con la Constitución de 1999. El propósito de romper ese tejido institucional tiene dos sentidos. Por un lado, con instituciones débiles se dificulta la permanencia de la Revolución Bolivariana en el poder. Por el otro, en el buscado escenario de un gobierno de transición, se facilitaría el desmantelamiento de la institucionalidad construida desde 1999 y por ende la reversión del proceso de cambio y el regreso a un Estado neoliberal sustentado en la democracia liberal procedimental.

Al respecto, cabe mencionar que, con la aprobación de la Constitución de 1999, se reemplazaron en su totalidad los órganos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, además de la creación del poder electoral y el poder moral como poderes completamente separados e independientes de los tres otros, el primero constituido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el segundo por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República.

El proceso bolivariano se caracteriza por ser un impulsor de formas organizativas populares enmarcadas en la idea de democracia participativa y protagónica. Entre 2006 y 2007, se instauró una nueva institucionalidad basada en el poder popular (PP) que busca ser la forma de realización de la democracia participativa y protagónica (Machado et al., 2018). Esa institucionalidad genera las bases para el autogobierno comunitario en la figura de las comunas, que asumen atribuciones de administración, prestación de

servicios y ejecución de obras, además de tener su propia estructura institucional, que incluye un parlamento comunal, un consejo ejecutivo, comités de gestión y banco comunal, entre otros (Barrios Benatuil et al., 2018).

Este es el marco institucional que Estados Unidos intenta debilitar y desconocer. Las prácticas organizativas basadas en la democracia participativa, protagónica y directa no son reconocidas por los valores liberales estadounidenses, donde la única democracia válida y legítima es la procedimental y delegativa. Para el Departamento de Estado, “Maduro y su régimen han tomado una serie de pasos para dismantelar las instituciones democráticas y para socavar la confianza del pueblo venezolano en su democracia” (DoS, 2018, p. 3). La vía para revertir ese proceso es el apoyo a la oposición que encontró una posibilidad en las elecciones legislativas de 2015: “la marginada pero legítimamente elegida Asamblea Nacional controlada por la oposición necesita desesperadamente desarrollar capacidades si se trata de desempeñar un importante papel restaurando la democracia, las libertades civiles y la prosperidad venezolanas” (DoS, 2018, p. 9). Resulta significativo señalar el reconocimiento del proceso electoral solo cuando beneficia a la oposición, aun en un momento en el que ya se señalaba al gobierno como autoritario y dictatorial.

Los mecanismos para llevar a cabo esta operación son la aplicación de medidas coercitivas en las que se conjuga la etapa de rompimiento del tejido social y los mecanismos de desestabilización política y económica con la de la deslegitimación institucional y que temporalmente se ha desarrollado entre el 2018 y 2020. Por una parte, encontramos la aplicación de sanciones y embargos financieros que terminan por deteriorar las condiciones económicas del país, dificultando los esfuerzos del gobierno por salir de la emergencia económica y agravando los problemas de desabastecimiento. Por otra parte, se encuentran las acciones diplomáticas que, desde 2019, han desconocido al presidente Nicolás Maduro como jefe del ejecutivo y han reconocido al diputado de VP, Juan Guaidó, como

presidente encargado tras una *juramentación* que careció de cualquier legitimidad legal. Es una estrategia de asfixia que busca sentar las bases para una paulatina sustitución de la institucionalidad.

En 2015, todavía siendo Barack Obama presidente de Estados Unidos, se declaró a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional a través de la orden ejecutiva 13692. Anteriormente, el Congreso de Estados Unidos había aprobado el Acta de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, en la cual se establece un marco legal para imponer sanciones contra el gobierno, funcionarios y entes del Estado venezolano.

Sucesivamente, se han decretado siete órdenes ejecutivas más entre el 2015 y 2019, las cuales se realizan dentro del ámbito diplomático, pero están encaminadas a sostener las sanciones y bloqueos económico y financiero y son ejecutadas por el Departamento del Tesoro. Entre 2015 y 2018, dichas sanciones estaban dirigidas contra individuos específicos y algunas instituciones como PDVSA, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Pero a partir de 2019, con la orden ejecutiva 13857, se desconoció al gobierno de Nicolás Maduro como un todo y se empezó a reconocer al diputado Juan Guaidó como presidente del país. Por su parte, la orden 13884, establece un bloqueo total a Venezuela, lo que consolida su aislamiento diplomático, político y económico.

Actualmente, en la lista de sancionados, figuran 98 venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la ANC Diosdado Cabello, los jueces del TSJ, generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como gobernadores, el director del Banco Central de Venezuela (BCV) y el ministro de relaciones exteriores, entre otros (Ribando, 2020). Sin embargo, aunque las sanciones puedan estar dirigidas contra individuos específicos, en la práctica se trata de debilitar las instituciones por medio de la descalificación y criminalización de funcionarios del Estado, a los que se acusa de autoritarismo, corrupción e, incluso, de tráfico de drogas.

Tabla 1. Sanciones de Estados Unidos contra Venezuela		
Sanción	Fecha	Motivo/Propósito
Acta de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela	18 de diciembre de 2014 (Congreso)	Acta para imponer sanciones dirigidas a personas responsables de violaciones a los derechos humanos o a manifestantes antigubernamentales, para fortalecer la sociedad civil en Venezuela y para otros propósitos
Orden ejecutiva 13692	8 de marzo de 2015	Establece que la erosión de los DD.HH, persecución política, restricciones a libertad de prensa, uso de violencia, corrupción constituyen amenaza a seguridad nacional de Estados Unidos.
Orden Ejecutiva 13808	24 de agosto de 2017	Se anexan a los motivos de la orden 13692 la responsabilidad por la crisis humanitaria y el establecimiento de la Asamblea Constituyente. Se prohíben transacciones relacionadas al financiamiento a PDVSA (nuevos prestamos). Se prohíbe el acceso de Venezuela al mercado financiero.
Orden ejecutiva 13827	19 de marzo de 2018	Se prohíben transacciones en monedas digitales.
Orden ejecutiva 13835	21 de marzo de 2018	Se prohíbe la compra de deuda del gobierno y cualquier transacción relacionada.
Orden ejecutiva 13850	1 de noviembre de 2018	Se bloquean todas las propiedades e intereses en Estados Unidos de las personas especificadas.
Orden ejecutiva 13857	25 de enero de 2019	Se amplía el término gobierno de Venezuela a cualquier subdivisión política o agencia incluyendo el BCV y PDVSA
Orden ejecutiva 13884	5 de agosto de 2019	Bloqueo de propiedades e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos.

Fuente: elaboración de Yetiani Romero con datos del US Department of the Treasury (DOT) (2020) y Ribando (2020).

No obstante, el esfuerzo de Estados Unidos no es suficiente por sí mismo. El papel de sus aliados regionales ha sido necesario para

establecer el cerco y aislamiento diplomático. En agosto de 2017, se constituyó el Grupo de Lima en un momento en el que América Latina había regresado mayoritariamente a políticas conservadoras y pro estadounidenses. Originalmente, el grupo de Lima se conformó por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Más recientemente, se han adherido Guyana, Haití, Santa Lucía, Ecuador, República Dominicana y Bolivia, esta última tras el golpe de Estado de 2019. Por su parte, México y Argentina se han alejado de las posiciones del grupo tras sus respectivos cambios de gobierno recientes, aunque no lo han abandonado de manera oficial.

El grupo de Lima es una expresión de la alineación de la mayoría de países latinoamericanos a los intereses estadounidenses. El grupo considera al gobierno venezolano un régimen ilegal, ilegítimo y dictatorial, al mismo tiempo que reconocen a Guaidó como presidente y apoyan a Estados Unidos en su guerra económica contra Venezuela. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) también se ha usado para aislar Venezuela. En mayo de 2016, su secretario general, Luis Almagro, inició un proceso para aplicar la carta democrática interamericana a petición de la Asamblea Nacional. Los esfuerzos rindieron fruto en 2017 con la aprobación de un documento que señalaba el rompimiento del orden constitucional, lo que fue respondido por Venezuela con su salida del organismo.

Paralelamente, se lleva a cabo una *guerra financiera* que en un primer momento fue encubierta y basada en la publicación de índices de riesgo-país (Curcio, 2017, p. 117), pero desde 2017, comenzó a dirigirse al bloqueo abierto. Esto ha consistido en el bloqueo de cuentas y apropiación de activos venezolanos en el exterior. Tal es el caso de CITGO, la filial de PDVSA que opera en Estados Unidos y que ha sido embargada a favor de las empresas ConocoPhillips y Cristallex y que, en 2019, le fue entregada al *gobierno* de Juan Guaidó. De la misma forma, el gobierno estadounidense ha otorgado el control de cuentas bancarias de Venezuela al grupo de Guaidó, mientras que en países europeos se han embargado cuentas y reservas de oro de propiedad del Estado venezolano.

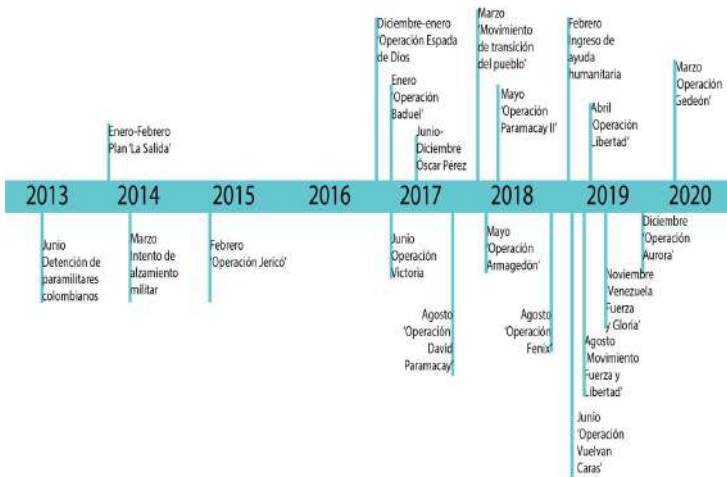
A pesar de este esfuerzo por desconocer a las instituciones del Estado y considerarlas ilegítimas, no obstante, la fortaleza de las prácticas organizativas y las propias instituciones del Estado no han permitido un clima de inestabilidad que sea suficiente para forzar la renuncia del presidente o su derrocamiento desde la Asamblea Nacional.

Intervención Directa

La expresión de intervención directa remite al despliegue de un ejército o fuerzas militares en territorio extranjero. En el caso venezolano, esta es una posibilidad que se ha contemplado mediante una fuerza de coalición entre Estados Unidos, Colombia y Brasil y que representaría la transformación de la guerra en regular. Sin embargo, la forma de intervención que ha operado contra Venezuela ha sido encubierta por medio de incursiones de desertores de la FANB desde Colombia e intentos de golpe de Estado.

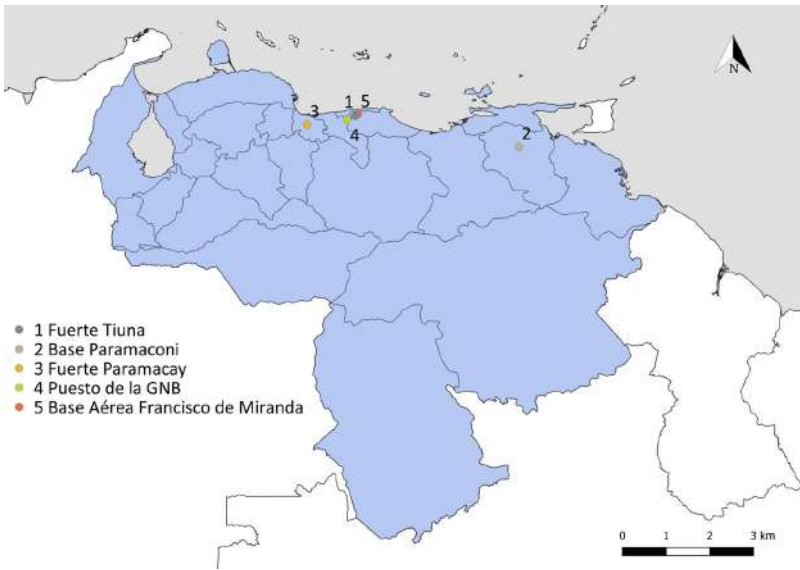
La lista de dichas acciones es larga, contando al menos un ataque a distintos objetivos militares por año que se pueden observar en la siguiente línea del tiempo y, con más detalle, en la tabla del anexo 1:

Operaciones de golpe de Estado e intervención directa



Fuentes: Elaboración propia con datos de Cabello (2020); Escobar (2020) y Misión Verdad (2020b).

Mapa 2. Puestos estratégicos



Fuente: elaboración de Adriana Franco.

De esta lista, cabe destacar el intento de ingresar cajas con supuesta *ayuda humanitaria* de la USAID tras de la *juramentación* de Guaidó y el rápido reconocimiento que le brindaron Estados Unidos y el Grupo de Lima. El escenario fue montado el 23 de febrero, día en el que se pretendía introducir las cajas desde las fronteras con Colombia y Brasil e incluyó el traslado de Guaidó a Colombia con apoyo de reconocidos grupos paramilitares, el desarrollo de eventos violentos y la deserción de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que tomaron un vehículo oficial y huyeron a Colombia tras atropellar a varios de los presentes en el puente fronterizo entre Cúcuta y Táchira.

Cada uno de los intentos anteriores por derrocar al gobierno venezolano ha fracasado y la mayoría de ellos han sido desactivados antes de iniciar sus acciones. Se trata de acciones militares en las que se enlazan todas las etapas de la guerra descritas anteriormente. La narrativa mediática justifica una acción militar que busca derrocar a

un pretendido gobierno corrupto y autoritario; la corrosión política y social busca un clima propicio para atacar objetivos militares; y el acoso y deslegitimación institucional posibilitaría la instalación de un gobierno de facto. En muchos de los casos, estaría directamente involucrado el gobierno estadounidense y colombiano, siendo la *Operación Gedeón* la que proporciona más pruebas del contubernio entre Colombia, los actores de la oposición y Estados Unidos.

Al respecto, vale la pena profundizar en la *Operación Gedeón* dada su importancia.

En la madrugada del 3 de mayo, fue frustrada la incursión de mercenarios provenientes de Colombia vía marítima con la intervención de la FANB y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde murieron ocho de los tripulantes de la embarcación durante el enfrentamiento y dos más fueron detenidos (Misión Verdad, 2020a,p. 17). Al siguiente día, otra embarcación fue detenida con ocho tripulantes tras la intervención de pescadores junto a las fuerzas de seguridad, en un operativo llamado *Negro Primero*. En los siguientes días, varios individuos fueron detenidos, sumando 66 implicados hasta el 21 de mayo (Telesur, 2020). En el transcurso de la operación, se mostró un video en redes sociales donde aparecía Jordan Goudreau, presidente de la empresa Silvercorp USA, junto al excapitán venezolano Javier Nieto Quintero. En dicha grabación, ambos hombres confirmaron la veracidad de la operación con la intención de llegar a Caracas y detener al presidente Nicolás Maduro para ser llevado a Estados Unidos (al estilo Noriega). La mayoría de los involucrados habían participado en los intentos anteriores de golpe de Estado.

Más trascendente fue que se comprobó la existencia de un contrato firmado por Goudreau y Guaidó para la realización del operativo. El mismo Goudreau confirmó la existencia del contrato e incluso acusó a Guaidó de incumplir sus compromisos. Guaidó, por su parte, negó haber firmado cualquier tipo de documento, sin embargo, el contrato con su firma fue difundido por las autoridades venezolanas. Con ánimos de disminuir el impacto negativo hacia Guaidó y

su partido, otro de los firmantes, el estratega Juan José Rendón, reconoció públicamente haber firmado el contrato, aunque según su versión, Guaidó no firmó y se trataba de un contrato exploratorio cuyo plan nunca se ejecutó. Tras sus declaraciones, Rendón renunció a su *puesto* en el comité de estrategia del *gobierno interino de Guaidó* (Teruggi, 2020). El contrato entre Guaidó y Silvercorp demuestra el involucramiento de actores externos en la operación, incluyendo los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Brasil.

Es muy poco probable que la inteligencia del gobierno estadounidense no tuviera conocimiento del rol de Silvercorp USA y los campamentos colombianos. Es además endeble la tesis de que el gobierno estadounidense simplemente los dejó actuar por cuenta propia contra uno de sus objetivos estratégicos como lo es el gobierno venezolano (Misión Verdad, 2020a,p. 14).

Días antes de la incursión, el 23 de marzo, el fiscal de Estados Unidos, William Barr, presentó cargos por narcotráfico contra el presidente Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino López y Maikel Moreno. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a estos funcionarios como líderes del *Cártel de los Soles*, el cual supuestamente opera desde 1999 y es responsable de la importación de cocaína a Estados Unidos (Misión Verdad, 2020a,p. 11). Esta maniobra justificó el despliegue de embarcaciones estadounidenses en el Caribe e involucró a la DEA en la maniobra.

La Operación Gedeón constituye una forma de intervención relativamente inédita al incorporar una empresa privada de seguridad. Su éxito habría posibilitado la entrada de Estados Unidos de manera directa y materializar la toma del poder colocando en la presidencia a alguna figura de la oposición. La utilización de mercenarios ha permitido a Estados Unidos negar su participación en la operación, siguiendo un esquema de ensayo-error en los intentos por derrocar al gobierno. Por otra parte, su fracaso ha tenido repercusiones negativas para la oposición, que desde enero de 2020 venía retornando a las disputas internas que caracterizan a la coalición de la MUD,

debido al cambio de presidente en la Asamblea Nacional.⁶ La exposición de los contratos con Silvercorp ha profundizado la marginación de Guaidó del escenario político local, mientras que sigue siendo reconocido como presidente por parte de la comunidad internacional.

Por último, hay que considerar la posibilidad de una intervención abierta. El presidente de Estados Unidos ha insistido en diversas ocasiones en su deseo de invadir militarmente Venezuela de manera directa. Tanto los países del grupo de Lima como el *establishment* republicano lo han frenado en sus pretensiones debido al costo político que tendría, pero no debe descartarse. De tal manera, hay que considerar el escenario en las fronteras con Colombia, Brasil y Guyana. Sin duda, en una incursión militar, el escenario más probable se daría vía Colombia, pero no hay que olvidar la participación de Brasil en el cierre de frontera y los intentos por ingresar cajas de la USAID en 2019 y la disputa territorial que mantienen Guyana y Venezuela por el territorio del Esequibo.

Consideraciones finales

La pretensión de Estados Unidos, sus aliados y la oposición venezolana por derrocar al gobierno de Venezuela se ha topado con la firmeza del grupo gobernante, la decidida participación popular en la defensa de su proceso y la creatividad para afrontar la situación

⁶ Una parte de la oposición, con apoyo de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), eligieron a Luis Parra, ex militante de PJ, como nuevo presidente de la AN, mientras que el grupo de Guaidó protagonizaba un altercado a las afueras del Palacio Federal Legislativo debido a que reclamó que no se le había permitido entrar al palacio legislativo. Sin embargo, el ingreso nunca le fue negado, sino solamente a los diputados inhabilitados por la justicia con los que iba acompañado. Ese grupo *reeligió* a Guaidó en un recinto alternativo, sin sustento legal y emulando su *juramentación* como presidente un año antes. Además, debido a la proximidad de las elecciones legislativas, una parte de la MUD se ha mostrado dispuesta a participar en el proceso electoral, mientras que la línea dura insiste en desconocer el proceso aún antes de realizarse, y apearse al llamado a Washington para intervenir en la situación.

desfavorable que se genera con el aislamiento, los bloqueos y las sanciones impuestas desde el país del norte. A lo largo de veinte años, se generó una base de apoyo a la Revolución Bolivariana cuyo modelo de organización desafía la hegemonía capitalista y desde donde se puede encontrar el principal punto de defensa del proceso venezolano. Al respecto, cabe resaltar que el Estado no es el principal protagonista del proceso venezolano, sino un pueblo movilizado sin el cual la Revolución Bolivariana habría visto su final desde hace tiempo.

Precisamente, el caso de la guerra contra Venezuela nos muestra que la simple determinación del sujeto hegemónico por disciplinar a un país no es suficiente cuando existe un proceso organizado desde abajo y un sujeto contrahegemónico determinado a defender su independencia. Esto no implica que Estados Unidos, en ejercicio de su posición hegemónica, no haya logrado nada en su ofensiva contra Venezuela. El aislamiento de Venezuela en todas las dimensiones ha permitido a Estados Unidos consolidar su posición de cabecilla continental al revertir procesos análogos en otros países de la región. Si bien no se ha alcanzado el objetivo de recuperar Venezuela, ha logrado castigar el indisciplina del pueblo venezolano con medidas de asfixia que degradan la calidad de vida.

En el ámbito mediático es donde se encuentra una de las grandes debilidades del proceso bolivariano debido a la presencia hegemónica de los grandes medios de información. Desde sus lentes, en el exterior de Venezuela, vemos una situación caótica que requiere de un final mediado por la comunidad internacional, léase Estados Unidos y sus aliados. Pero algunos proyectos contrainformativos, impulsados por Venezuela o países confrontados también con el *mainstream*, permiten inclinar un poco la balanza para exponer que la situación venezolana ha sido creada por los intereses injerencistas de Estados Unidos y la oposición venezolana que busca revertir la Revolución Bolivariana.

A pesar de las prácticas organizativas que ha impulsado la Revolución Bolivariana, la desestabilización política ha permitido crear

descontento entre la población debido a los efectos en la descomposición del tejido social, lo que se ha manifestado en el apoyo de parte importante de la población a la oposición. El pueblo venezolano se encuentra dividido entre el apoyo al proceso bolivariano y los que han encontrado ese proceso como culpable de la situación actual, mientras que una tercera opción, que no simpatiza ni con el gobierno ni con la oposición, sigue siendo minoritaria como para representar una alternativa.

En cuanto a la institucionalidad, el proceso de desplazamiento ideológico que implicó refundar el Estado en 1999 ha permitido la permanencia de instituciones que se mantienen firmes en su apoyo a la Revolución Bolivariana. Es preciso señalar que esto no significó una ideologización de las instituciones del Estado, como lo consideran los actores liberales, sino un cambio de ideología. En la democracia liberal occidental, se considera que sus instituciones son no ideológicas, lo que resulta en la mayor de sus falacias, pues defienden precisamente la ideología liberal, una clase social en el poder y un modo de producción.

Finalmente, en el ámbito militar, los actores golpistas no han podido encontrar apoyo de la FANB ni las deserciones necesarias para tener éxito en sus intentos por derrocar al gobierno. Esto se debe precisamente al profundo proceso de cambio ideológico en el seno de la institución castrense durante la década pasada. Además, en una eventual invasión militar, las hipotéticas tropas invasoras se encontrarían con la aplicación de la doctrina militar venezolana de *Guerra Popular de Resistencia*, que incorpora las nociones de asimetría, guerra multidimensional y un *sistema de resistencia* que incorpora a la población en la defensa del país por medio de la figura de las Milicias Bolivarianas.

Bibliografía

- Aponte-Moreno, Marco (9 de agosto de 2019). Punto de vista: 5 razones por las que las sanciones a Venezuela no acabarán con el gobierno de Maduro (como desea Estados Unidos). *BBC Londres*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49289922>
- Banfi, Karina (15 de septiembre de 2019). Venezuela: todo comenzó con la violación a la libertad de expresión. *Infobae*. <https://www.infobae.com/opinion/2019/09/15/venezuela-todo-comenzo-con-la-violacion-a-la-libertad-de-expresion/>
- Barrios Benatuil, Ana Graciela, et al. (2018). Poder popular territorial. En Gabbert, Karin y Martínez, Alexandra (comp.), *Venezuela desde adentro*. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.
- Bartley, Kim y Ó Briain Donnacha (Directores). (2003). *La revolución no será transmitida* [Documental]. Bórd Scannán na hÉireann; Nederlandse Programma Stichting; CoBo Fonds.
- Cabello, Diosdado (6 de mayo de 2020). *Vea el mapa de eventos que se relacionan con la invasión imperialista a Venezuela*. Con el Mazo Dando (Video). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=F9TYQ9aEeMw>
- Casado, Fernando (2016). *Antiperiodistas: confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela*. Caracas: El perro y la rana.
- Casey, Nicholas y Kurmanaev, Anatoly (18 de febrero de 2019). La crisis de la ayuda humanitaria es la clave del cambio en Venezuela. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/es/2019/02/18/espanol/america-latina/venezuela-ayuda-humanitaria-frontera.html>
- Ceceña, Ana Esther (2018). Poder, emancipación, guerra y sujetidad. En Efraín León (coord.), *Praxis espacial en América Latina. Lo geopolítico puesto en cuestión*. México: Itaca-UNAM.
- Ceceña, Ana Esther (2013). La dominación de espectro completo sobre América. *Patria*, 1(1), 43-59.
- Ceceña, Ana Esther y Barrios, David (2017). *Venezuela ¿invadida o cercada?* <http://geopolitica.iiec.unam.mx/node/178>

CIDH (2017). *Situación de derechos humanos en Venezuela*. Organización de Estados Americanos.

CNN (4 de agosto de 2018). *Venezuela: Nicolás Maduro sale ileso de “atentado” en Caracas, dicen autoridades*. <https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/04/venezuela-evento-que-encabezaba-nicolas-maduro-es-interrumpido-por-ruidos-que-podrian-ser-explosiones/>

Cotovio, Vasco; Isa Soares y William Bonnett (20 de agosto de 2019). Un rastro de “oro sangriento” conduce al gobierno de Venezuela. CNN. <https://cnnespanol.cnn.com/2019/08/20/un-rastro-de-oro-sangriento-conduce-al-gobierno-de-venezuela/>

Curcio Curcio, Pasqualina (2017). *La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela*. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Department of Defense (2020). *DoD dictionary of military and associated terms*. Washington: DoD.

Department of State (2018). *Integrated country strategy: Venezuela 2018-2022*. Washington: DoS. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/ICS-Venezuela_UNCLASS_508.pdf

Department of State (2019). *U.S. Relations With Venezuela*. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/>

Department of the Treasury (2020). *Venezuela-related Sanctions*. <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/venezuela.aspx>

Espacio Público (2018). Situación general del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela: enero-diciembre 2017. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación* (182), 137-146.

Escobar, Facundo (21 de mayo de 2020). The US endless war against Venezuela. *United World*. <https://uworld.com/10964-the-us-endless-war-against-venezuela/>

Faller, Craig (1 de mayo de 2019). Opening Statement: Adm. Faller before the House Armed Services Committee. Washington: DoD. <https://www.southcom.mil/Media/Speeches-Transcripts/Article/1834898/opening-statement-adm-faller-before-the-house-armed-services-committee-may-1-20/>

Fazio, Carlos (2013). *Terrorismo mediático. La construcción social del miedo en México*. México: Debate.

Fazio, Carlos (25 de marzo y 8 de abril de 2019). Estados Unidos y el cambio de régimen en Venezuela [I y II]. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2019/03/25/opinion/016a1pol> y <https://www.jornada.com.mx/2019/04/08/opinion/017a2pol>

Fréitez, María Eugenia, et al. (2018). En Gabbert, Karin y Martínez Alexandra (comp.), *Venezuela desde adentro*. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.

Galiñanes, Pablo y Rossi, Verónica (2015). ¿Existe una real oposición al chavismo en Venezuela? Análisis sobre la Mesa de Unidad Democrática. *Revista política latinoamericana* (1), 23-35.

Golinger, Eva (13 de septiembre de 2007). USAID en Bolivia y Venezuela: la subversión silenciosa. *América Latina en Movimiento*. <https://www.alainet.org/es/active/19685>

Golinger, Eva (28 de enero de 2019). The Dirty Hand of the National Endowment for Democracy in Venezuela. *Consortium News*. <https://consortiumnews.com/2019/01/28/the-dirty-hand-of-the-national-endowment-for-democracy-in-venezuela/>

HRW (5 de marzo de 2013). *Venezuela: El legado autoritario de Chávez*. <https://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez>

Joint Chiefs of Staff (2010). *Joint Publication 3-13.2, Psychological Operations*. Washington: Departamento de Defensa.

Joint Chiefs of Staff (2013). *Joint Publication 1, Doctrine for the Armed Forces of the United States*, Washington: Departamento de Defensa.

Joint Chiefs of Staff (2014). *Joint Publication 3-05, Special Operations*. Washington: Departamento de Defensa.

Joint Chiefs of Staff (2014). *Joint Publication 3-13, Information Operations*, Washington: Departamento de Defensa.

Machado, Jesús, Nuñez, Betty y Arraíz, Nanciely (2018). Poder popular: una mirada desde las bases. En Gabbert, Karin y Martínez, Alexandra (comp.), *Venezuela desde adentro*. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.

Méndez Urich, Luis (6 de agosto de 2018). Tras supuesto atentado a Maduro, Venezuela responsabiliza a Colombia de “cualquier nueva agresión”. *France 24*. París. <https://www.france24.com/es/20180806-nicolas-maduro-intento-atentado-colombia>

Misión Verdad (2020a). *Operaciones mercenarias contra Venezuela: Evaluación de una amenaza militar fracasada*. Caracas: Misión Verdad.

Misión Verdad (16 de mayo de 2020b). *Siete años de operaciones mercenarias contra Venezuela: un registro de todos los planes desmantelados*. Caracas.

Navarro, Ernesto J. (2018). *Tierras raras o coltán: La otra riqueza mineral de Venezuela*. <https://www.ocmal.org/tierras-raras-o-coltan-la-otra-riqueza-mineral-de-venezuela/>

NED (2020). *Venezuela 2019*. <https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/venezuela-2019/>

Ospina-Valencia, José (4 de febrero de 2019). Crisis humanitaria en Venezuela: el dilema de la ayuda. *Deutsche Welle*. Berlín. <https://www.dw.com/es/crisis-humanitaria-en-venezuela-el-dilema-de-la-ayuda/a-47358497>

OPEP (2020). *World proven crude oil reserves by country. Annual Statistics Bulletin*. <https://asb.opec.org/index.php/data-download>

PDVSA (sin fecha). *Faja Petrolera del Orinoco Hugo Chávez Frías*. Caracas: PDVSA. http://www.pdvsa.com/images/pdf/cuadernos/Faja_petrolera.pdf

Ribando, Seelke Clare (2020). *Venezuela: Overview of U.S. Sanctions*. Washington: Congressional Research Service. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10715>

Salas Rodríguez, Luis (2015). *22 claves para entender y combatir la guerra económica*. Caracas: El perro y la rana.

Santander, Diego (1 de enero de 2018). Nicolás Maduro sube el salario mínimo por sexta vez en un año. *El Mundo*. <https://www.elmundo.es/internacional/2018/01/01/5a4a8ae0268e3e3f428b4606.html>

Singer, Florantonia (15 de octubre de 2019). Venezuela cerrará el año con una inflación del 200.000%. *El País*. https://elpais.com/economia/2019/10/15/actualidad/1571150056_773127.html

Southcom (2019). *United States Southern Command Strategy*. “*Enduring Promise for the Americas*”.

Telesur (25 de mayo de 2020). *Capturan a nuevos implicados en Operación Gedeón*. <https://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-revela-captura-nuevos-mercenarios-20200525-0002.html>

Terruggi, Marco (12 de mayo de 2020). Acorralado, renunció J.J. Rendón, asesor de Juan Guaidó. Página 12. <https://www.pagina12.com.ar/265219-acorralado-renuncio-j-j-rendon-asesor-de-juan-guaido>

USAID (6 de febrero de 2020). *USAID en Venezuela, preguntas frecuentes*. <https://www.usaid.gov/venezuela/usaid-en-venezuela-preguntas-frecuentes>

Vázquez Heredia, Omar (2019). La situación económica de Venezuela en el período 2014-2018 y disputa intelectual. Socialismo, guerra económica o ajuste económico. *Observatorio Latinoamericano y Caribeño* (3), 121-139.

Vélez Cabrera, Juan Pablo; Lara Ledesma, Abigail y Ruiz Abril, Karina Marianela (2019). Vulneración a la libertad de expresión. Caso los jinetes del apocalipsis. *Revista de ciencias sociales*, 25(1), 102-110.

Anexo 1

Operaciones de golpe de Estado 2013-2020				
Nombre	Fecha	Objetivo	Lugar	Involucrados
-	10 de junio 2013	Asesinato de Nicolás Maduro	Estados Táchira y Portuguesa	Miembros del grupo Los Rastrojos
La Salida	Enero-febrero 2013	Renuncia del presidente	Caracas	Antonio Ledezma, Leopoldo López, María Corina Machado
-	24 de marzo de 2014	Alzamiento militar	Caracas	General de brigada José Daniel Machillanda Díaz; general de división Oswaldo Hernández Sánchez; general de brigada Carlos Alberto Millán Yaguaracuto
Operación Jericó	12 de febrero 2015	Atacar el Palacio de Miraflores en avión artillado	Caracas	-
Operación Espada de Dios	Diciembre 2016-enero 2017	Asesinato de Nicolás Maduro	Caracas	Raúl Isaías Baduel; Ángel Vivas Perdomo
Operación Baduel	Enero 2017	Golpe de Estado; tomar Fuerte Tiuna; conformar Estado Mayor	Aragua, Carabobo, Zulia, Guárico, Bolívar	Raúl Isaías Baduel; Ricardo Haussman; Milos Alcalá
Operación Victoria	Junio 2017	Sabotaje electoral; tomar brigada Caribe	Base Paramaconi	General de brigada Jesús Alberto Milano; teniente coronel Durvis Melean
Óscar Pérez	Junio-diciembre 2017	Ataque al TSJ y MP en junio; ataque a comando de GNB en diciembre	Caracas y estado Miranda	Óscar Pérez

Operación Paramacay I	6 de agosto 2017	Tomar fuerte Paramacay	Fuerte Paramacay	Juan Carlos Caguaripano; Raider Alexander; Delgado Taboski
Movimiento de transición del pueblo	Marzo 2018	Sabotaje electoral; asaltar unidades militares	Fuerte Tiuna (Caracas)	Miguel Rodríguez Torres; Marín Chaparro
Operación Paramacay II	Mayo 2018	Sabotaje electoral; tomar unidades militares	Fuerte Paramacay	García Palomo
Operación Armagedón	Mayo 2018	Suspender elecciones; tomar base aérea Francisco de Miranda	Caracas	Miguel Rodríguez Torres; Antonio Rivero
Operación Fénix	4 de agosto 2018	Asesinato de Nicolás Maduro	Caracas	Julio Borges; Juan Requesen; Delgado Tabosky
-	Febrero 2019	Ingresar cajas de USAID	Frontera con Colombia y Brasil	Juan Guaidó
Operación Libertad	30 de abril 2019	Golpe de Estado	Base Aérea Francisco de Miranda	Juan Guaidó; Leopoldo López; Edgar Zambrano; Ilich Sánchez; Soto Farias
Operación Vuelvan Caras	Junio 2019	Golpe de Estado	Caracas	General de brigada Eduardo José Baez; Cliver Alcalá; general de brigada Miguel Carmelo Sisco; Josnars Adolfo Baduel
Movimiento Fuerza y Libertad	Agosto 2019	Golpe de Estado	Caracas	Cliver Alcalá; Pedro Pablo Santano Carvallo

Venezuela Honor y Gloria	Noviembre 2019	Tomar fuertes militares y robo de armas	Sucre	Ramón Martínez; Yanet Fermín; Fernando Orozco
Operación Aurora	Diciembre 2019	Ataque de fuertes militares	Bolívar	-
Operación Gedeón	Marzo 2020	Golpe de Estado; arresto o asesinato de Nicolás Maduro	Caracas; Aragua; Miranda; Carabobo; Bolívar	Jordan Goudreou; Cliver Alcalá; Juan Guaidó

Fuentes: elaboración propia con datos de Cabello (2020); Escobar (2020) y Misión Verdad (2020b).